



Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra
hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Compartir bajo la Misma Licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

El documento electrónico y su aplicación en la administración pública electrónica colombiana.

The electronic document and its application in the Colombian electronic public administration.

Fredy Albeiro Aldana León**

Sumario

Resumen, Introducción, 1. Concepto del documento electrónico. 2. Regulación del documento electrónico en Colombia. 3. La utilización e impacto del documento electrónico en la administración pública en Colombia. 3.1 El acto administrativo electrónico, 3.2 La firma digital. 4. Desarrollo jurisprudencial del documento (validez) en Colombia y su aplicación en la administración pública. Conclusiones. Referencias.

Resumen.

Con el pasar del tiempo, la evolución de los medios electrónicos ha sido cada vez más rápida y ha reclamado muchos de los ámbitos de la vida cotidiana del ser humano, puesto que su utilización permite tener a la mano de manera cómoda y accesible cualquier tipo de información. En el ámbito del derecho esta necesidad no se ha hecho esperar, por lo que en distintas ramas del derecho se han visto implementados distintos medios electrónicos; desde los computadores para la búsqueda de expedientes judiciales en los despachos hasta el documento electrónico. El uso de este tipo de documentos es bastante nuevo para el derecho, y por lo tanto su utilización trae consigo un nuevo mundo tanto para quienes ejercen como para quienes acceden y se valen de él en el uso del derecho. El presente escrito

Artículo resultado de investigación elaborado para optar por el título de Abogado de la Universidad Católica de Colombia por parte de Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Correo institucional: faaldana58@ucatolica.edu.co . Este artículo fue dirigido por el Doctor Marco Emilio Sánchez Acevedo docente investigador de la Universidad Católica de Colombia.

pretende determinar cuál es la regulación del documento electrónico en Colombia y cómo este ha impactado en la administración pública.

Palabras Clave: Documento, Electrónico, Tecnologías, Administrativo, Derecho.

Abstract.

With the passage of time, the evolution of electronic media has been increasingly rapid and has claimed many of the areas of human daily life, since its use allows any type of device to be conveniently and accessible at hand. information. In the field of law, this need has not been long in coming, which is why different electronic media have been implemented in different branches of law; from the computers for the search of judicial files in the offices to the electronic document. The use of this type of document is quite new to the law, and therefore its use brings with it a new world both for those who practice it and for those who access and use it in the use of law. This document aims to determine what is the regulation of the electronic document in Colombia and how it has impacted on the public administration.

Keywords:

Document, Electronic, Technologies, Administrative, Law.

Introducción.

Tal como lo dice el autor Sánchez

“La posibilidad de que los ciudadanos interactúen entre sí y con las instituciones representa un reto para la estructura del Estado en el contexto de la globalización, en todos los aspectos, así como para todo el derecho en sus diferentes dimensiones” (Sánchez, 2014, p. 27).

Las tecnologías¹ en este siglo están teniendo gran protagonismo en todos los ámbitos, la transformación² digital ha logrado grandes avances en todas las ramas del derecho, y se ha convertido

¹ En este sentido, según Aige,

Los particulares, cada vez más, deciden recurrir a estos medios por su comodidad (ya que pueden acceder desde su domicilio, sin realizar desplazamientos, simplemente conectando su ordenador, móvil u otro dispositivo similar) por su rapidez (con estos medios se pueden realizar actos al instante) e incluso por la amplitud de posibilidades que abarcan (Aige, 2014, p.6).

² Complementando la información, a diferencia de los documentos en papel, los documentos electrónicos se han aceptado como tal hace sólo unos años, esto ha provocado que algunos aspectos legales aún no estén definidos del todo para este formato, aunque en la mayoría de ellos se trabaja arduamente. Aunque existen leyes a su favor, como la "Technology Policy 96-16A",²⁰ dictada en New York para facilitar el intercambio de información entre el estado y determinadas agencias mediante los sistemas para la gestión de documentos

en la piedra angular de la digitalización de la administración pública, en donde ha desaparecido el tan conocido papel y todo el cambio organizacional que interviene en esto. Pero la digitalización no es cuestión de pasar de papel a electrónico, con ella intervienen muchos cambios y transformaciones de los que la administración pública ha tenido que tomar riendas, como la firma electrónica, la sede administrativa, y el expediente, donde este último ha tomado un mayor sentido con el uso de los instrumentos digitales.

Esto es, sin duda, un gran reto para la sociedad del nuevo siglo, pero de forma muy especial para las instituciones (empresariales o educativas), para los profesionales de la información y documentación, especialmente, para la administración pública y privada cuya vocación productora de servicios colectivos exige una transformación profunda de sus estructuras y de sus funcionarios, no solamente como un paso a la modernización, sino como una exigencia del servicio normalizado y de calidad (Álvarez y Rodríguez, 2005, p.10).

Con la transformación, se lograría mayor celeridad a la hora de llevar a cabo muchos procesos que anteriormente eran dispendiosos tanto para la administración como para quienes hacían uso de ella. Es por ello que se crea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la regulación del documento electrónico en Colombia y cómo este ha impactado en la administración pública? Esta pregunta de investigación ayudará a entender la importancia del documento³ electrónico, no solo en el presente si no desde sus primeras iniciativas y cómo este ha impactado en la administración teniendo en cuenta sus características, y que es lo que viene a futuro con la digitalización de los proyectos de la administración pública. Para esta investigación se utilizará el método descriptivo, tendiendo como objetivo general determinar cuál es la regulación del documento electrónico en Colombia y cómo esta ha impactado en la administración pública.

Unido a esto se presentan los siguientes objetivos específicos que serán desarrollados principalmente como subtemas de la investigación los cuales son:

1. Analizar el concepto de documento electrónico.

electrónicos, la confiabilidad de un documento electrónico, entendida como la capacidad de que el documento pueda ser tomado como prueba en un sentido legal, es todavía una aspiración de los especialistas (García, 2001).

³ El tratadista Jairo Parra Quijano, en su obra "Manual de Derecho Probatorio", respecto del documento en general señala que es toda cosa capaz de representar un hecho cualquiera o una manifestación del pensamiento, y con relación al documento electrónico, la cosa es el soporte electrónico (Parra, 2002).

2. Describir cuál ha sido la regulación del documento electrónico que se ha dado en Colombia.

3. Examinar cómo se utiliza el documento electrónico en la administración pública colombiana teniendo en cuenta las características del mismo.

Lo que llevará a las conclusiones investigativas que irán acompañadas de una breve reflexión sobre los desafíos que ha creado el documento electrónico en la administración pública.

1. Concepto del documento electrónico

Para el desarrollo introductorio del presente escrito es necesario resaltar que el concepto del documento electrónico ha sido de gran interés para muchos doctrinantes en donde cada uno de ellos presenta distintos⁴ puntos de vista al respecto, por lo tanto en este acápite se presentarán algunos de los aportes de los mismos, para así llegar a una concepción más completa y clara sobre el documento electrónico lo que llevará a un mejor desarrollo de la pregunta de investigación.

Según González y Acevedo (2015, p.15) un documento electrónico es “aquel contenido en un soporte electrónico, que para su visualización requiere una pantalla textual, gráfica y otros dispositivos de emisión de audio, vídeo, etc”. Esta visión aun siendo tan genérica demuestra uno de los elementos básicos del documento electrónico, el cual es el medio en que se desarrolla y en qué consiste, toda vez que se habla sobre el uso de elementos electrónicos para su reproducción, siendo esta la principal característica y la más distintiva del documento electrónico.

Por otro lado, para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el Documento Electrónico es la información generada, enviada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares (MinTic, 2017). Lo que genera un punto de encuentro en los conceptos a los que se está haciendo referencia; es decir, la información contenida en cualquier medio electrónico tiende a ser parte de la definición de este tipo de documento. Sin embargo, es importante

⁴ Las características esenciales del documento electrónico según el autor Pinochet (2002 p. 4) serían las siguientes:

1. El documento debe estar escrito en lenguaje binario.

2. El documento debe estar o poder ser almacenado en soporte informático, magnético, óptico o cualquier otra clase de soporte que pudiera ser desarrollado para tales fines.

3. El documento debe poder ser, mediante la aplicación del correspondiente programa informático, transformado a alguna clase de lenguaje comprensible por el ser humano.

encontrar una diferencia entre los documentos electrónicos y documentos en papel, la cual se centra en que los primeros son, únicamente, registros lógicos; mientras que los documentos en papel son normalmente concebidos como registros físicos. Los registros lógicos están asociados entre ellos mediante relaciones formales, definidas y lógicas, mientras que las propiedades de las cosas físicas hacen que éstas se asocien como objetos materiales con localizaciones, adheridos y marcas concretas (Álvarez y Rodríguez, 2005).

Ahora bien, para tomar el enfoque necesario en esta investigación el concepto de documento electrónico se debe ver desde la óptica de la administración pública. De acuerdo con el Manual de Documentos Administrativos, la actividad administrativa se distingue por su carácter documental, en el sentido de que los documentos administrativos constituyen el testimonio de su actividad, son el soporte en el que se materializan los diferentes actos de la Administración Pública y constituyen su forma externa (Redondo, 2010), esto en el sentido general del documento, a lo que el autor Díaz (2002) se atreve a dar una definición singularizada para el documento electrónico administrativo, entendiéndolo como

la entidad de información de carácter único, cuyo contenido estructurado y contextualizado se presenta como evidencia de las acciones y funciones propias de las organizaciones, es probatorio de derechos y obligaciones de las partes, y se genera, gestiona y transmite por medios electrónicos, informáticos o telemáticos (p. 60).

Rengifo define el documento electrónico como “un objeto físico dirigido a conservar y transmitir informaciones mediante mensajes en lenguaje natural, realizado con la intermediación de funciones electrónicas” (2000, p.11), a lo que la autora María Fernanda Guerrero sostiene que el documento electrónico “está contenido en soporte diverso al papel, lo que no significa que por esa razón no sea capaz de representar una idea o un pensamiento” (1994, p.22). Es la concepción del documento electrónico del autor Díaz la que se tomará como punto de partida para esta investigación, ya que después de las definiciones dadas reúne los elementos esenciales del documento y de que es lo que quiere decir que el documento se digitalice en la administración pública; y ya que el documento electrónico está bien delimitado y definido se procederá al punto central de este trabajo, describiendo la regulación del documento electrónico en general y en la administración pública colombiana.

2. Regulación del Documento electrónico en Colombia.

Ahora bien, ya estipulada una concepción básica sobre el documento electrónico es necesario determinar cuál ha sido su regulación normativa ya que, debido al incremento en el uso de tecnologías alrededor del mundo se ha vuelto imperativa la utilización de las mismas en todos los ámbitos de la vida de las personas en general, lo que ha llevado a que en el ámbito del derecho se creen normas para regular este uso de medios electrónicos, fomentando un ambiente seguro y garantista en el medio. Los países latinoamericanos a similitud de la gran mayoría de países del mundo desde hace aproximadamente dos décadas cuentan con legislación sobre documentos electrónicos, donde la legislación sobre medios electrónicos se refiere básicamente al valor legal del documento electrónico, su aplicación en las administraciones públicas y otros temas relacionados con el aprovechamiento de los medios informáticos y de la información (Mendoza, 2006).

La Ley 527 de 1999 o de Comercio Electrónico y Firmas Digitales fue promulgada en Colombia años después de las discusiones que realizó la Comisión de Naciones Unidas para el Decreto Mercantil Internacional CNUDMI y que se materializó con la expedición de la Resolución 51/162 de 1996 por medio de la cual se aprobó la Ley modelo sobre Comercio Electrónico. Posterior a la promulgación de la Resolución 51/162, se creó una comisión Interinstitucional que estudió la naciente Ley modelo y que determinó los mecanismos para la implementación de dicho instrumento en la Legislación. Esta comisión redactora fue conformada por miembros de los Ministerios de Justicia y del

Derecho, Transporte, Desarrollo Económico y Comercio Exterior además de la academia y sectores del comercio. Fue así como en agosto de 1999 fue sancionada la Ley 527 de 1999 o de Comercio Electrónico en Colombia (Gutiérrez, 2003).

Con la Ley 527 de 1999 se abarcaron temas para el desarrollo del comercio electrónico como la definición desde un punto de vista jurídico de los Mensajes de Datos, los Sistema de Información (art. 2), el Reconocimiento Legal de los Mensajes de Datos (art. 5), el Principio de Equivalente Funcional de Documentos Escritos, la Firma Manuscrita y del Documento Original (arts. 6, 7, 8 y 28), la Eficacia Probatoria de la Prueba Digital (arts. 10 y 11), el Criterio de Integridad Necesario para la admisión del mensaje de datos tanto en el terreno judicial como administrativo entre otros (art. 9), la Formación de los Contratos Celebrados por Medios Electrónicos (art. 14), el Acuse de Recibo, presunciones legales, efectos jurídicos, tiempo de envío y recepción de los mensajes de datos, (arts. 20 al 25), Comercio Electrónico en materia de transporte de mercancías (arts. 26 y 27) y todo lo referente al Régimen de Firmas Electrónicas. De la misma forma tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia le han dado el impulso necesario a la Ley 527 de 1999 para que pueda contar con las herramientas necesarias para poder ser aplicada al ordenamiento actual, dándole a jueces y abogados los instrumentos jurídicos que delimitan su ámbito de aplicación (Flórez, 2014).

Por parte de la administración pública se encuentra en la ley 1437 de 2011 como una de las iniciativas para la utilización de herramientas electrónicas en donde el capítulo IV contiene la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo presentando como ejemplo el artículo 53 que expresa lo siguiente:

Artículo 53. Procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos. Los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso a la administración, la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos.

En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se aplicarán las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen. Temas como el acto administrativo electrónico, la notificación electrónica, el uso de medios electrónicos y más, son parte de este capítulo de la ley 1437 de 2011 en acompañamiento de la ley 527 de 1999, donde se demuestra la inminente utilización de estas herramientas de la tecnología en

el ejercicio del uso de la administración pública, demostrando de esta manera como los implementos tecnológicos con el pasar del tiempo han tenido una gran influencia en todos los ámbitos importantes y más afluentes en la vida humana, y con ello también en el ámbito del derecho, siendo de esta manera un imperante en la evolución del derecho en todas sus ramas.

En la jurisprudencia colombiana se ha desarrollado aún más el tema del uso de las tecnologías en el derecho; una de las sentencias pioneras al respecto es la sentencia C-662 del 2000, que denomino que los mensajes de datos tendrían la misma validez jurídica que los documentos escritos “El mensaje de datos como tal debe recibir el mismo tratamiento de los documentos consignados en papel, es decir, debe dársele la misma eficacia jurídica, por cuanto el mensaje de datos comporta los mismos criterios de un documento” (Corte Constitucional, Sentencia C-662 de 2000).

Además de ello, determinó como característica del mensaje de datos que este,

es una prueba de la existencia y naturaleza de la voluntad de las partes de comprometerse; es un documento legible que puede ser presentado ante las Entidades públicas y los Tribunales; admite su almacenamiento e inalterabilidad en el tiempo; facilita la revisión y posterior auditoría para los fines contables, impositivos y reglamentarios; afirma derechos y obligaciones jurídicas entre los intervinientes y es accesible para su ulterior consulta, es decir, que la información en forma de datos computarizados es susceptible de leerse e interpretarse (Corte Constitucional, Sentencia C-662 de 2000).

Relacionando lo anterior, la Corte Constitucional reafirmó la concepción del documento electrónico, en donde existe una característica básica para la creación del mismo:

El documento electrónico es un método de expresión que requiere de un instrumento de creación, conservación, cancelación, y transmisión; tal instrumento está constituido por un aparato electrónico. De esta forma la disciplina de dicho documento no puede prescindir del computador que lo crea, lo conserva y lo cancela, y la red de terminales de computador que permiten su transmisión (Corte Constitucional, Sentencia C-356 de 2003).

Sin embargo, para el documento electrónico y el mensaje de datos también existen requisitos que demuestren su validez, por lo que la Corte Constitucional estableció:

Para que al mensaje de datos, reconocido como equivalente del escrito por la norma atacada, se le pueda dar valor dentro de una actuación judicial, como la que invoca el

demandante, no basta que la información que el mensaje de datos contiene sea accesible para su posterior consulta, sino que se hace necesario el respeto de todos los demás requisitos a que alude el artículo 95 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Corte Constitucional, Sentencia C-831 de 2001).

Esto demuestra a todas luces la importancia y la validez que se le ha dado al documento electrónico y con él al mensaje de datos, ha empezado a utilizarse paulatinamente en el derecho y se ha implementado para facilitar los distintos procesos que se llevan a cabo diariamente, lo que lleva al siguiente apartado el cual habla sobre la utilización del documento electrónico y su impacto en la administración pública ya que como lo dice el autor Sánchez (2016)

(...) Se requiere avanzar en incrementar la oferta de datos abiertos y en la calidad de la información en línea para ciudadanos y empresas; también, masificar los trámites y los servicios en línea para diferentes dispositivos electrónicos y tecnologías digitales; sustentar la toma de decisiones mediante las TIC; asegurar que todos los gobiernos locales brinden servicios transaccionales al ciudadano; acelerar el uso de las TIC en la justicia, la salud y la gestión de los derechos ciudadanos; impulsar la coordinación y la interoperabilidad de la administración pública basada en estándares abiertos respetando la protección de datos personales; completar el marco legal y normativo de las TIC en el sector público para desplegar su potencial y responder a las mayores demandas de la sociedad, y desarrollar estrategias nacionales que den confianza al ciudadano en el uso seguro de las TIC en la Administración Pública. (p.90).

Esto impulsará el uso de las tecnologías en todos los ámbitos sociales y ayudaría a que la gestión documental y de trámites fuese más rápida y concreta.

3. La utilización e impacto del documento electrónico en la administración pública en Colombia.

Como se pudo evidenciar, el uso de las tecnologías y su normativización ha estado presente en Colombia desde hace mucho tiempo, pero no es sino con el Decreto 1078 de 2015 que ha dado a conocer el uso de las tecnologías en el derecho, éste establece la estructura del sector de las tecnologías de la información y la comunicación, las entidades que lo componen presentando la necesidad de normativizar el uso de las tecnologías en el ámbito estatal, sin embargo, no solo la rama ejecutiva hace uso de estos implementos tecnológicos, pues en la rama judicial también ha hecho parte, pues “la implementación de TIC puede tener por objeto generar o mejorar el vínculo existente entre el sistema judicial, y las diversas instituciones que lo componen y la ciudadanía, mejorando el nivel de

acceso a la justicia” (Lobos, 2010, p.118), de esta manera las personas pueden acceder a la justicia de una manera rápida, ya que el derecho de acceso a la información “genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible, a las solicitudes, lo que, a su vez, conlleva la obligación de producir o capturar la información pública” (Sánchez, 2018, p. 18).

Además de ello, en la normatividad vigente aparece un decreto que regula de manera más exacta todo lo que tiene que ver con el manejo del documento electrónico, su validez, exigibilidad y pertinencia, según el Decreto de Gestión documental digital 2609 de 2012 art 23 (Compilado en el artículo 1080 de 2015), las características de un documento electrónico de archivo son:

- a) Contenido estable. El contenido del documento no cambia en el tiempo; los cambios deben estar autorizados conforme a reglas establecidas, limitadas y controladas por la entidad, o el administrador del sistema, de forma que, al ser consultado cualquier documento, una misma pregunta, solicitud o interacción genere siempre el mismo resultado.
- b) Forma documental fija. Se define como la cualidad del documento de archivo que asegura que su contenido permanece completo y sin alteraciones, a lo largo del tiempo, manteniendo la forma original que tuvo durante su creación.
- c) Vínculo archivístico. Los documentos de archivo están vinculados entre sí, por razones de la procedencia, proceso, trámite o función y por lo tanto este vínculo debe mantenerse a lo largo del tiempo, a través de metadatos que reflejen el contenido, el contexto y la estructura tanto del documento como de la agrupación documental a la que pertenece (serie, subserie o expediente).
- d) Equivalente Funcional. Cuando se requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.

Ahora bien, una de las mayores problemáticas que se presenta con la aparición del documento electrónico es la autenticidad de los mismos cuando estos son emitidos ya sea por una persona natural o por cualquier entidad pública, al respecto el decreto de gestión documental designó lo siguiente:

Artículo 24. Requisitos para la presunción de autenticidad de los documentos electrónicos de archivo. Sin perjuicio de lo establecido en las normas procesales se deben tener en cuenta

además los siguientes requisitos en la gestión de documentos electrónicos de archivo, para asegurar en el tiempo su presunción de autenticidad.

a) Se debe expresar desde el momento de su creación los atributos del documento de archivo, tales como el trámite o asunto al que corresponde, las nombres de quienes intervinieron en las diferentes acciones que se llevaron a cabo con el documento, la fecha de creación, la fecha de transmisión, nivel de acceso, los privilegios de acceso, mantenimiento, modificación, transferencia y disposición.

b) Definición de los procedimientos de protección para evitar la pérdida o corrupción de los documentos de archivo, los medios de almacenamiento y la tecnología.

c) Desde el contexto jurídico de acuerdo con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 527 de 1999, según el cual en toda actuación administrativa o judicial no se negará eficacia probatoria, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos.

d) Desde el contexto administrativo y documental según las reglas a partir de las cuales el documento de archivo es creado.

e) Formas documentales, autenticación del documento de archivo y su identificación de autoridad.

f) Otra información de ayuda a la verificación de autenticidad a través de metadatos.

g) Establecer procedimientos idóneos para asegurar la cadena de preservación de los documentos electrónicos de archivo a lo largo del ciclo de vida, y en el transcurso del tiempo.

Es decir, la autenticidad del documento electrónico presenta un valor probatorio seguro y eficaz para quienes hacen uso del mismo, además de lo ya nombrado, el decreto 2609 de 2012 también reglamentó temas como la integralidad del documento electrónico, los principios del proceso de gestión documental, las generalidades sobre el sistema de gestión documental, la fiabilidad, inalterabilidad y disponibilidad de los mismos por medio de los mecanismos que el decreto y las demás leyes han establecido. Además de ello se hace mención sobre las sedes electrónicas las cuáles según Galindo y Rover “La Sede Electrónica es el medio en el que los ciudadanos se relacionan con las Administraciones en el modelo de e-Administración, al igual que las oficinas físicas lo son en el modelo de Administración «tradicional».” (2009, p.205). Estas sedes permiten que los ciudadanos estén cerca de la administración de una manera más rápida y directa, donde se pueden consultar iniciar

trámites, consultarlos y gestionar dudas con respecto a cada una de las instituciones públicas, estas sedes electrónicas se pueden encontrar en las páginas electrónicas (web) que la mayoría de las instituciones públicas maneja. Junto con ello se ha podido denotar que no solo en la rama ejecutiva se manejan este tipo de sedes, pues en la rama judicial también existen herramientas donde los ciudadanos pueden revisar el estado de sus procesos por medio de la plataforma ayudando a agilizar el proceso de consulta.

Sabiendo que actualmente no es imposible trasladarse con facilidad como anteriormente se acostumbraba, se ha hecho más imperativa la unión entre el documento electrónico y su manejo en las distintas ramas del poder, a lo que se ha demostrado gran intención por parte del derecho administrativo como lo dispone la Ley 1437 y las demás normas expuestas en este documento, pero no solo debe tenerse en cuenta lo ya descrito frente al documento electrónico, el acceso que tengan los usuarios de la justicia administrativa debe generarse de manera digital, tanto para crear garantías como para generar un cambio evolutivo en la justicia nacional. Por ejemplo, para revisar un expediente en los juzgados administrativos o en los mismos tribunales todavía existe la vieja costumbre de ir directamente a donde estos se encuentran localizados, sin embargo, si valiéndose de la situación actual se genera un cambio radical en este tipo de actuaciones, permitiendo a las partes que intervienen en determinado proceso, visualizar las actuaciones más recientes de manera digital en la plataforma de la Rama judicial, y junto con esto, se permitiera de la misma manera allegar al juzgado todo tipo de comunicaciones respecto a un proceso, la afluencia de personas se vería reducida de manera notable, generando un cambio perceptible no sólo para evitar el contagio de un virus que hace parte de nuestras vidas, si no para eliminar la carga exagerada que no le ha permitido en muchas ocasiones a los representantes de la Rama Judicial a prestar entera atención y disposición a casos importantes.

Es decir, si se usan las dificultades y falencias que ha presentado la justicia en estos momentos, para convertirlas en una oportunidad para generar una nueva plataforma digital que garantice los derechos de los ciudadanos y la celeridad en la revisión de sus procesos se haría del derecho y la justicia un lugar sano y confiable para cada uno de los ciudadanos de la nación, sobre todo de quienes la ejercen. En la administración⁵ pública el uso de las tecnologías ha tomado un papel fundamental sobre todo en las últimas décadas donde la digitalización de todo tipo de documentos ha causado especial atención, sin embargo la firma digital y el acto administrativo electrónico son los que han

⁵ Ortega Rivero considera que actualmente la filosofía de la administración no es la misma que antes, y que hoy tenemos un sector público competitivo, un Estado que quiere adelgazar, una administración que utiliza nuevas técnicas de dirección, un Estado que quiere ser más eficiente para ser mejor aceptado por los ciudadanos (Ortega, 1999, p.371).

tomado mucho más protagonismo en la administración pública por lo tanto se hablará de ellos y de su gran impacto en el uso de la administración pública.

3.1 El acto administrativo electrónico⁶.

Uno de las iniciativas más preponderantes en el derecho administrativo es la creación o implementación del acto administrativo electrónico. El desarrollo del Acto Administrativo Electrónico⁷, ha sido relativamente nuevo, hasta hace unos años, desde finales del siglo pasado, la administración pública, empezó a pensar en la posibilidad de realizar los Actos de la Administración de forma electrónica. El uso de los computadores, como herramienta de trabajo, se comenzó a masificar en la década de los noventa, para 1996 la Rama Judicial comenzó a dotar a los Juzgados de computadores, a pesar que ya en los años ochenta se comercializaban equipos de cómputo para el hogar y la oficina (Ruiz, 2016). Como muestra de esta evolución, para el primer semestre de 1994, Telecom logra conectarse a la Red Mundial de Computadores, que estaba dirigida a brindar el servicio de conexión paga, con posterioridad, en el mes de mayo, Colciencias y las Universidades de los Andes, Nacional de Colombia, del Valle y Eafit, también se conectan a internet con fines académicos (Guzmán, 2015), demostrando la proliferación del uso de los instrumentos electrónicos, y cómo se fue utilizando de manera simultánea por distintas instituciones.

Sin embargo, contrario a muchas opiniones de los doctrinantes, los documentos electrónicos tienen la misma entidad que un documento escrito o soportado en papel, llegando a la conclusión de que el acto administrativo electrónico debe cumplir con los requisitos de la ley 527 de 1999, para que así pueda tener la calidad de prueba, y que tenga como atributo la transparencia y la legalidad del acto administrativo, aunque el Código Contencioso Administrativo no define qué se debe escribir en el acto administrativo. Con respecto al tema, el autor Gordillo 2003 expresa lo siguiente:

Los actos administrativos de soporte digital no se diferencian en cuanto a su régimen jurídico de los documentados en soporte papel. El hecho de tener soporte no papel no les quita el carácter de actos administrativos, ni obsta a la presunción de legitimidad que les es propia. Así como una luz roja es suficiente para transmitir al conductor de un vehículo la prohibición de avanzar, así también un haz de luz o un holograma puede transmitir otro tipo de mensaje, como

⁶ Al respecto, en materia de administración pública el acto administrativo electrónico se encuentra regulado en la ley 1437 de 2011 en el artículo 57.

⁷ Como características del Acto Administrativo, el autor Penagos señala que es una decisión unilateral de la voluntad administrativa de cualquier órgano del Estado o de los particulares, que tiene la facultad de crear, declarar, modificar o extinguir una relación jurídica (Penagos, 2008, págs. 184-186).

también lo puede hacer cualquier soporte físico capaz de contener la información digitalizada de que se trate, en tanto sea comprensible por las personas a las cuales va dirigida (p.13).

Es decir, la regulación de este tipo de actos debe ser la misma que tienen los actos administrativos soportados en papel, y el hecho de que se reproduzcan en un medio diferente no les quita valor probatorio ni validez. Esta conclusión a la que se ha llegado gracias a la ayuda de doctrinantes y las leyes permite dilucidar el cambio que se está dando en muchos ámbitos de la academia, sobre todo en la administración pública, donde se da pleno valor y validez al acto administrativo electrónico siendo este el objeto de la administración pública.

3.2 La firma digital.

Seguido al documento electrónico, inmersa en el acto administrativo electrónico se encuentra la Firma Digital, pues es de saberse que tanto en los documentos como en los actos administrativos se puede hacer uso de las firmas de quienes suscriben el documento. La creación de esta iniciativa digital ha creado distintas preocupaciones con respecto a la validez, originalidad y eficacia en cuanto al documento suscrito, sin embargo, para un estudio concienzudo del término se podría decir que, la noción de firma encierra usualmente la imagen de que debe ser manuscrita, lo que presume la máxima garantía de la autoría (Formentin, 2012). Con la irrupción de las tecnologías es obvio que el requisito de firma manuscrita no puede cumplirse en los documentos electrónicos, por lo que se conciben nuevas modalidades de comprobación de identidad, de consentimiento, de autenticidad y de integridad de los documentos.

Por lo tanto, la firma digital⁸ fue creada de una manera simultánea a cualquier tipo de documento electrónico, por la nombrada necesidad de dar certeza de que quien suscribió el documento era la misma persona que constaba en la firma. “El significado general de la firma auténtica en cuanto a la extensión de la palabra tiene un gran significado y valor, lo que certifica y avala el contenido o mensaje del documento” (Urcia, 2009, p. 124).

Como este ha sido un elemento revolucionario de la digitalización la honorable Corte se ha pronunciado en el tema; según la Sentencia C - 662 del 2000 la firma digital se denomina como:

un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el

⁸ La ley modelo de la UNCITRAL, que es el referente de la Ley de comercio colombiana, sobre firmas digitales, la define como datos en forma electrónica establecidos en un mensaje de datos (Fonseca, 2012, p.105).

mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación (Corte Constitucional, Sentencia C-662 de 2000).

Este elemento permite determinar cómo anteriormente se mencionó la autenticidad documento electrónico, con respecto a la individualización del autor o autores del documento electrónico, el digitador es fácilmente identificable, también los sujetos autorizados a operar la máquina, el tiempo en que se utilizó, las claves, etc., no obstante los citados sujetos no son los obligados con el negocio en su aspecto sustancial y es aquí donde se necesita una autenticación y como es un documento electrónico necesitará también una firma electrónica (Jovel, 2014).

Ahora bien, la firma digital tiene unas funciones determinadas que son: 1. Identificar al autor; 2. Dar certeza de la participación de esa persona en el acto de firmar; 3. Relacionar a la persona con el contenido del documento. Estas funciones determinan el objeto de la firma digital y cuál es su finalidad, dando paso a los requisitos que valoran la fuerza probatoria de la misma o de un mensaje de datos en general: (i) La confiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, (ii) la confiabilidad de la forma en que se haya conservado la integridad de la información, (iii) la forma en la que se identifique a su iniciador y (iv) cualquier otro factor pertinente (Morales, 2016).

Creando con estos un ambiente propicio y seguro para quienes usen las herramientas de la tecnología para hacer cualquier tipo de trámite, siendo el receptor de documentos o quien los envía, dando garantías de que lo enviado es realmente auténtico. Por medio del Decreto 2364 de 2012 el Gobierno logró definir los términos básicos de la firma electrónica, delimitando su uso, validez y características, además de generar una herramienta como lo son las entidades certificadoras, creadas para dar fe de la autenticidad de una firma electrónica para dar seguridad y tranquilidad a los usuarios de las mismas. Sin embargo, aunque hay algunas leyes que fundamentan la existencia de la firma electrónica muchas veces se han dado conflictos por la falta de regulación integral sobre la misma, a lo que es necesario la creación de una normativa clara sobre la utilización de la misma y sobre todo de los elementos y requisitos que la componen de manera general donde se tenga claridad de cómo deber ser utilizada y cuál es su valor probatorio.

4. Desarrollo jurisprudencial del documento (validez) en Colombia y su aplicación en la administración pública.

La validez jurídica del documento electrónico es el elemento que ha tenido más importancia para el manejo del mismo en situaciones donde los ciudadanos han tenido que utilizarlo en medio de trámites con la justicia o con el Estado, por lo tanto, fue de vital importancia tanto teóricamente como

para la jurisprudencia determinar la validez del mismo y como se ha venido aplicando en la administración pública.

Para el autor Sánchez, la eficacia de los documentos electrónicos “se encuentra enmarcada dentro de la posibilidad jurídica de que el acto administrativo produzca los efectos para los cuales ha sido creado” (2014, p.130), en la administración pública la producción de los efectos de los actos administrativos se da desde la notificación, ésta constituye un elemento fundamental para la seguridad jurídica y es, al mismo tiempo, una condición cuya realización depende la eficacia del acto administrativo. Por otra parte, como se ha nombrado anteriormente, la validez jurídica del documento electrónico se ha visto referenciada en la jurisprudencia, como los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad para informar y comunicar masivamente a millones de personas, como es el caso de la televisión y los diarios impresos o digitales (Barragán y López, 2018), de esta manera, puede influir en las decisiones judiciales, y no solamente en el caso en que se utilicen como medios para documentar un hecho, si no también en caso de ser utilizados como medios para realizar distintas actividades rutinarias en el derecho y sobre todas las cosas, en lo que tiene que ver con la atención al ciudadano y el derecho a acceder a la justicia. En el caso del derecho administrativo y del derecho público en general, el uso de las tecnologías en pro del acceso a la información siempre y cuando se entienda que en términos de la ley, la información pública a la cual el Estado está obligado a publicar será “toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal” (Sánchez, 2015, p.21), además será importante la creación de la política pública del Gobierno abierto, la implementación de la Ley de transparencia y acceso a la información pública y la aplicación de la estrategia de Gobierno en línea son el resultado de un esfuerzo interdisciplinario en busca de la garantía del derecho de acceso a la información pública, la transparencia y el perfeccionamiento de la relación Administración-administrado (Pérez, 2017).

En los términos de la utilización del documento electrónico aparece el principio de equivalencia funcional que determina la no discriminación al documento electrónico y a los medios electrónicos, es decir, que estos documentos y medios sean tratados como los medios escritos, sin pedir ningún otro tipo de requisito más que los ya pedidos en los documentos físicos, en esta manera la sentencia del Consejo de Estado con Nro. de expediente 11001-03-24-000-2010-00530-00, determina que:

La «equivalencia funcional» comprende aplicar el principio de la «no discriminación» por tratarse de mensaje de datos, pues pretende que estos produzcan los efectos jurídicos deseados por el emisor tal como si se tratara de documentos en papel, es decir, sin distinción alguna. es decir, que se debe respetar el uso de cualquier tecnología que se utilice o pueda usarse en el futuro a efectos de transmitir un mensaje de datos o firma electrónica, lo que

significa que no se pueden favorecer unas tecnologías sobre otras (Consejo de Estado con Nro. de expediente 11001-03-24-000-2010-00530-00).

Esta sentencia se remite a un punto importante para la utilización de los documentos y medios electrónicos en el derecho, en el caso del derecho público y el derecho administrativo, es necesario tener en cuenta este principio, pues, con lo ya estipulado en las diferentes leyes que lo disponen, y la jurisprudencia existente, se debe tomar el documento electrónico como un medio más que se puede utilizar para el uso diario del derecho, sin que se discrimine de ninguna manera ni se presuma falta de validez de los mismos. Además de ello, en la sentencia C-624 de 2007, en la que se estudió una demanda contra el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006, que modificó el artículo 565 del Estatuto Tributario, citado anteriormente, la Corte reiteró la constitucionalidad de los mecanismos de notificación electrónica, estableciendo que “estas normas están estrechamente relacionadas con la materialización del debido proceso administrativo en los procedimientos tributarios, aduaneros y cambiarios, en tanto prevén mecanismos eficaces para la notificación de las actuaciones de la administración” (Corte Constitucional, Sentencia C-624 de 2007), la notificación electrónica es uno de los medios más utilizados por la administración pública, pues de esta manera se ha logrado informar a los interesados de las decisiones jurídicas tomadas por el estado o por los entes judiciales, esto junto con el principio de equivalencia funcional permiten que cada vez más la administración pública pueda manejar herramientas tecnológicas para agilizar los procesos rutinarios y más que eso, para mejorar de una manera visible el proceso ya existente.

Además de la presentación electrónica de derechos de petición, notificaciones, y documentos electrónicos que permiten un acceso a la justicia y a la información, más allá de ello se ha utilizado como un medio que busca dar conocimiento a los usuarios de la justicia de los movimientos de sus procesos, y sobre todo, de permitirles acceder a la justicia de una manera eficaz que pueda evitar aglomeraciones constantes tal como lo describe la Sentencia T-686 de 2007:

La progresiva implementación de este tipo de mecanismos por parte de la rama judicial responde a la finalidad de hacer más eficiente el cumplimiento de sus funciones, racionalizando el uso del tiempo por parte de los empleados y funcionarios judiciales, pues con ayuda de aquellas herramientas se espera disminuir el volumen de usuarios que demanda el acceso directo a los expedientes. En definitiva, el recurso a estos sistemas de información constituye una herramienta que facilita a la administración de justicia el cumplimiento eficiente de sus cometidos, en particular de su deber de dar publicidad a las actuaciones judiciales, a la vez que facilita a los ciudadanos el acceso a la administración de justicia (Corte Constitucional, Sentencia T-686 de 2007).

Sin embargo, con la situación actual, y los problemas para la libre circulación se han denotado distintos problemas y falencias en el sistema judicial y ejecutivo, además de su manejo de las herramientas tecnológicas, pues no han funcionado de manera óptima para que los usuarios de la justicia hagan uso de estas herramientas para informarse sobre los procesos que están a su nombre, esto ha logrado vulnerar los derechos fundamentales de acuerdo a que recursos como la acción de tutela han cambiado sus términos céleres por la cantidad de acciones instauradas y la poca capacitación que tienen los funcionarios de la justicia para manejar los implementos tecnológicos a la mano. Esto permite evidenciar que, aunque se ha intentado realizar un uso frecuente y cada vez más eficiente de las herramientas tecnológicas en el derecho, y sobre todo en el acceso a la justicia y a la administración aún falta desarrollo de estos mismos, aún más teniendo en cuenta que con la aparición de un virus se ha limitado la facilidad que se tenía anteriormente para acceder a las instituciones de justicia.

Conclusiones.

El mundo está desarrollándose actualmente en una era donde se busca usar las tecnologías que cada vez están más a la vanguardia para todas las necesidades que se tienen tanto a nivel personal como en comunidad; el uso de la tecnología en el ejercicio del derecho se hace cada vez más común y se presenta como un reto para todas las ramas y especializaciones del mismo, en el caso de la administración pública el uso de estos instrumentos se ha denominado como una facilidad para quienes ejercen su derecho de acción y para la celeridad de los distintos procesos.

Con el paso del tiempo se ha llegado a la conclusión de que un documento electrónico es toda información contenida en cualquier herramienta electrónica utilizada para tal fin, este, además cuenta con las características que deben ser: 1. El documento debe estar escrito en lenguaje binario. 2. El documento debe estar o poder ser almacenado en soporte informático, magnético, óptico o cualquier otra clase de soporte que pudiera ser desarrollado para tales fines. 3. El documento debe poder ser, mediante la aplicación del correspondiente programa informático, transformado a alguna clase de lenguaje comprensible por el ser humano, tal y como se expresó en el primer aparte de esta investigación.

Basados en esto, el documento electrónico tiene todas las garantías y bases normativas suficientes para ser reconocido como un medio de reproducción, leyes como la 527 de 1999 han creado una gran base para regular todo lo concerniente al uso y digitalización de documentos y sus derivados, sin embargo en la administración pública la ley 1437 de 2011 que es bastante reciente, ha demostrado el inminente uso de los elementos electrónicos junto con decretos como el 1078 de 2015, el 2609 de 2012 (compilado en el decreto 1080 de 2015) y el 2364 de 2012 quienes han reglamentado las iniciativas más importantes en el uso de las tecnologías en el derecho, además de las constantes interpretaciones de la Corte, han demostrado la importancia de su regulación y presentan a las TIC como las herramientas del ahora para una gestión de la administración más rápida y directa donde el ciudadano tenga plena seguridad para realizar sus trámites.

El acto administrativo electrónico y el uso de la firma digital son simplemente pruebas de cómo está cambiando el constante uso del derecho a beneficio de todos los que se recurren al mismo, dando esto como respuesta a la pregunta de investigación anteriormente planteada en el presente ensayo, donde se presenta una regulación tanto en la administración pública como en el uso del documento electrónico en general; normativa y jurisprudencialmente el documento electrónico se encuentra resguardado para su debida utilización creando como impacto el cambio de muchas iniciativas como lo son el acto administrativo, las firmas que se contienen en los documentos, y hasta las notificaciones dadas en todos estos procesos, las cuales son un elemento constitutivo de la eficacia de un acto administrativo ya sea electrónico o físico.

Por último, como reflexión del autor, es necesario que se utilicen campañas para educar a la comunidad sobre el uso de estos medios, ubicándolos en toda la normativa que resguarda a las tecnologías que hacen cada vez más fácil el ejercicio del derecho y que permiten tener una relación más consciente y cercana con sus herramientas. Ya que en el momento en que toda persona que haga uso del derecho y sobre todo de la administración pública de esta manera se logrará llegar a un ejercicio eficaz y con gran celeridad, además de esto deben ser creadas muchas más herramientas normativas

que certifiquen la seguridad y certeza de muchos elementos como la firma digital para que sean utilizados con más frecuencia. El uso de las distintas tecnologías hace parte del presente, y por consiguiente se deben usar con sumo cuidado para que hagan parte del futuro de una manera responsable y útil en cada ámbito de la vida y desarrollo humano.

Referencias.

- Aige, M. (2014). Los documentos electrónicos en el ámbito del proceso. Tesis doctoral. Departamento de Derecho Privado Universidad de las Islas Baleares.
- Álvarez, M & Rodríguez, J. (2005). *El documento electrónico: ¿Qué características debe cumplir de cara a las organizaciones del siglo XXI?*. Revista código 1, p.10. Universidad de la Salle.
- Barragán, P, y López, A. (2018). Las decisiones judiciales: un dilema entre la legitimidad y la influencia de los medios de comunicación. *Novum Jus*, Vol.12, No. 2.
- Díaz, A. (2002). Administración electrónica y gestión de archivos, en Documentos electrónicos en la Administración. Regulación jurídica y gestión archivística. Murcia: Dirección General de Cultura, D.L, pp. 60.
- Flórez, G. (2014). La validez jurídica de los documentos electrónicos en Colombia a partir de su evolución legislativa y jurisprudencial. *Revista Verba Iuris*, Vol.31, p.43-71. Bogotá D.C. Colombia.
- Fonseca, Z. (2012). Problemas de eficacia en actos administrativos expedidos por medios electrónicos. *Revista In Vestigium Ire*. Vol 5 p.p 95-108.
- Formentin, Y. (2012). La firma electrónica, su recepción legal. Especial referencia a la ausencia legislativa en Cuba. *Revista Ius*, Vol 7, No.31.
- Galindo, F., & Rover, A. (2009). Derecho, gobernanza y tecnologías de la información en la sociedad del conocimiento. Zaragoza, España. Editorial Prensas de la Universidad de Zaragoza. Recuperado de: <http://www.ebrary.com>.
- García, A. (2001). La gestión de documentos electrónicos como respuesta a las nuevas condiciones del entorno de información. *Revista ACIMED* Vol.9, No.3. Ciudad de la Habana
- González, J. y Acevedo, Y., (2015). La preservación del documento electrónico: análisis de aplicación de la normatividad vigente adoptadas en las entidades ministerio de comercio, industria y turismo y acción social en Colombia a partir del año 2000. Universidad de la Salle, Facultad de ciencias económicas y sociales.

- Gordillo, A. (2003) Tratado de derecho administrativo. El acto administrativo, capítulo VII, Los actos administrativos como instrumentos públicos. Recuperado 16 de abril de 2019 www.agustingordillo.net/Pdf/3-6/3-6aVII.pdf
- Guerrero, M. (1994). El mercado de valores desmaterializado (aspectos técnicos-legales), ponencia en el XIII Congreso Latinoamericano de Derecho Bancario, Santiago de Chile.
- Gutiérrez, M. (2003). Consideraciones sobre el tratamiento jurídico del comercio electrónico. Internet Comercio Electrónico y Telecomunicaciones. Bogotá. Universidad de los Andes. Ed. Legis.
- Guzmán, J. (2015). Ya estás tejiendo la Red. Bogotá: Intermedio Editores.
- Jovel, C. (2014). El documento electrónico, la firma digital y la contratación administrativa. Costa Rica.
- Lobos, R. (2010). El Uso de Nuevas Tecnologías en el Sistema Judicial: experiencias y precauciones. Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
- Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones. (2017). Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos.
- Morales, F. (2016). Validez de la prueba electrónica, un estudio sobre la firma digital y electrónica. Universidad Católica de Colombia
- Ortega, R. (1999). La renovación de las instituciones jurídico-administrativas: perspectivas del derecho administrativo español. *Revista Vniversitas*, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, nº 96, pág. 371.
- Parra Quijano, J. (2002). Manual de Derecho Probatorio. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional.
- Penagos, G. (2008). El Acto Administrativo. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley Ltda.
- Pérez, P. (2017). Alineación de los sistemas de información con la estrategia de gobierno en línea. *Novum Jus*, Vol. 11, No. 1.
- Perez, M. (2001). La relación médico-enfermo, presupuesto de responsabilidad civil (En torno a la "lex artis"). *Responsa iurisperitorum digesta*, Vol. 2, p.31.
- Pérez, A. (1995). Teoría General de las Obligaciones. Colombia, Editorial Temis. páginas 201 y ss. (Volúmen III, Parte II).
- Pinochet, R. (2002). El documento electrónico y la prueba literal. *Revista Ius et Praxis*, Vol.8, No.2. Talca.
- Rengifo, E. (2000). Comercio Electrónico, documento electrónico y Seguridad Jurídica, memorias sobre Comercio Electrónico, Universidad Externado de Colombia, 1ª. Edición.
- Redondo, M. (2010). El documento electrónico: un enfoque archivístico. *Revista general de información y documentación*. Vol 20. pp. 391-408.

- Ruiz, A. (2016). El acto administrativo electrónico en Colombia, Tesis de maestría. Universidad militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia.
- Sanchez, M. (2014). Eficacia y validez del acto administrativo electrónico. Bogotá. D.C. - Colombia. Editorial Universidad Católica de Colombia.
- Sánchez, M. (2015). El derecho y las tecnologías de la información y la comunicación. Bogotá. D.C. - Colombia. Editorial Universidad Católica de Colombia.
- Sánchez, M. (2016). El derecho a la buena administración electrónica. Bogotá. D.C. - Colombia. Editorial Universidad Católica de Colombia.
- Sánchez, M. (2018). Derecho y Big data. Bogotá. D.C. - Colombia. Editorial Universidad Católica de Colombia.
- Urcia, R. (2009). Verificación de firmas. Buenos Aires: La Rocca.

Normatividad.

Congreso de la República de Colombia. (2 de julio de 2012). Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011. Diario Oficial No. 47.953.

Congreso de la República de Colombia. (21 de agosto de 1999). Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Ley 527 de 1999. Diario Oficial No. 43.673.

Asamblea General. (16 de diciembre de 1996). Por la cual se expide la ley modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico resolución 51/162 de 1996.

Presidencia de la República. (22 de noviembre de 2012). Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones. Decreto 2364 de 2012.

Presidencia de la República. (14 de diciembre de 2012). Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado, Decreto 2609 de 2012.

Presidencia de la República. (26 de mayo de 2015) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 1078 de 2015.

Jurisprudencia.

Corte Constitucional, Sala plena. Sentencia C-662 (8 de junio del año 2000). Magistrado ponente: Fabio Morón Díaz.

Corte Constitucional, Sala plena. Sentencia C-624 (14 de agosto del año 2007). Magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño.

Corte Constitucional, Sala tercera de revisión. Sentencia T-686 (31 de agosto del año 2007). Magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño.

Corte Constitucional, Sala plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-356 (03 de mayo de 2003). Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.

Corte Constitucional, Sala plena de la Corte Constitucional. Sentencia C-831 (08 de agosto de 2011). Magistrado Ponente: Alvaro Tafur Galvis.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección primera. (8 de febrero del año 2018): Expediente Nro. 11001-03-24-000-2010-00530-00. Consejera Ponente: Maria Elizabeth García.